

(S-0619/12)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1°.- Otorgase jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, (Ley 26.378), ratificada por el Honorable Congreso de la Nación, el 9 Junio del 2008.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Beatriz L. Rojkes de Alperovich. -

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas acordaron formalmente poner a la firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado del sistema de derechos humanos del siglo XXI, creado para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de las cerca 650 millones de personas con discapacidad que se estima hay a nivel mundial.

Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han tratado de mejorar la situación de las personas con discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El interés de este Organismo Internacional por el bienestar y los derechos de estas personas, tiene sus orígenes en sus principios fundacionales, que están basados en los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de todos los seres humanos.

Los países firmantes de la convención deberán dictar nuevas leyes o corregir la legislación vigente, tanto nacionales como provinciales, de modo que las personas con discapacidad, tengan definitivamente los mismos derechos a la educación, al empleo, a la vida cultural, etc. como el resto de los ciudadanos.

Nuestra legislación hace referencia y regula los derechos de las personas con discapacidad, pero se hace necesario avanzar un poco mas corriendo las leyes vigentes para que coincidan con los estándares internacionales en esta materia.

En nuestro país es mucho lo que se viene trabajando, en este tema, pero todavía falta mucho por hacer, y como siempre sucede en estos casos, la parte más dificultosa y más lenta es siempre la cuestión cultural. Si lográramos que los grupos familiares y la comunidad en su conjunto, desechen conductas de marginación hacia los discapacitados, los niños como receptores de valores, adoptarían una actitud similar, y en el futuro quizás ya no tendríamos que estar reafirmando permanentemente los derechos que asisten a esta minoría social.

Nuestra legislación para personas con discapacidad es muy abarcativa y contempla casi todas las situaciones que tienen que ver con la no-discriminación y la igualdad de oportunidades, para las personas con alguna discapacidad, pero hasta que punto estas normas están siendo cumplidas por todos los niveles tanto públicos como privados?

La Constitución de la República Argentina en el inciso 23 del artículo 75 expresa: "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. (...)".

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, la Convención sobre derechos de las personas con discapacidades, con el objetivo de mejorar el trato que recibe alrededor del 10% de la población del mundo. Y es en ese sentido que todos los países signatarios de la misma tomen los principios aprobados en ella, como la referencia para toda la normativa que regula los derechos de estas personas.

Al ratificar el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la República Argentina se ha obligado legalmente a tratarlas, como sujetos de derecho, claramente definidos al igual que cualquier otra persona. De ahí que tendremos que adaptar toda la legislación, adecuándolas a las normas internacionales.

El Protocolo Facultativo del Convenio permite que individuos y grupos de los países que hayan ratificado el mismo, presenten una petición ante el Comité una vez que se hayan agotado todos los procedimientos nacionales de recurso.

Las instituciones de cada uno de los países, sean públicas o privadas, tienen la obligación de promover la efectivización de esos derechos. Esta Convención es, en gran medida, el resultado del esfuerzo de muchas personas con discapacidad y familiares de las mismas, que vienen luchando por revertir los obstáculos y postergaciones de las que han sido víctimas por años.

Que los Estados signatarios de este instrumento internacional hayan podido coincidir en la sucesión de principios que se encuentran contenidos en el mismo, nos da la esperanza de que estemos en el camino de un verdadero cambio de las prácticas institucionales y sociales.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.

Beatriz L. Rojkes de Alperovich. -